

RESUMEN EJECUTIVO

Ecuador es una república constitucional con sistema multipartidario, un presidente elegido y una legislatura unicameral. En febrero del 2013, los ciudadanos reeligieron al presidente Rafael Correa y escogieron a los miembros de la Asamblea Nacional en un proceso que en general fue libre y abierto. Las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes confiables de que las fuerzas de seguridad cometieron abusos contra los derechos humanos.

Los principales abusos en materia de derechos humanos fueron violaciones contra la integridad personal; restricciones a la libertad de expresión, prensa y asociación; y violencia y discriminación contra grupos vulnerables. Continuaron los informes sobre el uso excesivo de la fuerza y homicidios arbitrarios. Una nueva ley de comunicación impuso una serie de restricciones a los periodistas y amenazó a los medios independientes. El presidente Correa y su administración continuaron con los ataques verbales y legales contra los medios y la sociedad civil. El Gobierno utilizó mecanismos legales, como leyes de difamación y regulaciones administrativas, para reprimir la libertad de prensa y la agresión de la sociedad contra los periodistas continuó. Los funcionarios de Gobierno y las organizaciones de base continuaron informando violencia y discriminación contra mujeres, niños, grupos minoritarios y contra la comunidad GLBT de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Los siguientes problemas de derechos humanos continuaron: prisiones abarrotadas; arrestos y detenciones arbitrarias; abusos de las fuerzas de seguridad; un gran número de detenidos en prisión preventiva; y demoras y denegación del debido proceso en el sistema judicial. Los límites a la libertad de asociación continuaron, particularmente dirigidos a las comunidades indígenas que protestaban contra leyes que afectan a sus tierras comunitarias. La corrupción fue generalizada y la transparencia dentro del sector judicial continuó siendo un problema, a pesar de los intentos de reforma procesal. La trata de personas, la explotación de menores y el trabajo infantil continuaron.

El Gobierno a veces dio pasos para enjuiciar o castigar a oficiales de los servicios de seguridad y de otras ramas del Gobierno que cometieron abusos, a pesar que en algunos casos la influencia política y un sistema judicial ineficiente resultaron en impunidad.

Sección 1. Respeto por la integridad de las personas, incluido el derecho a no ser sometido a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

No hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieran asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, se presentaron informes fidedignos de que las fuerzas de seguridad, particularmente las unidades policiales, utilizaron fuerza excesiva y cometieron delitos aislados de homicidio. La unidad de asuntos internos investiga si los asesinatos cometidos por la Policía ocurrieron en cumplimiento del deber. Una rama de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas tiene un papel similar al de la unidad de asuntos internos de la policía.

La ley establece que la Fiscalía General debe participar en todas las investigaciones que tienen que ver con abusos contra los derechos humanos, incluso asesinatos ilegales y desaparición forzosa.

Hasta el 14 de agosto, la organización no gubernamental local (NGO) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), informó sobre siete demandas de homicidios arbitrarios a manos de las fuerzas de seguridad. La CEDHU informó que la Fiscalía General a menudo dudó en investigar los delitos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad, en parte porque éstas a menudo proporcionaron protección a los fiscales.

El 18 de julio, una corte encontró a los soldados Oscar Sánchez Miño, Nicanor F. González, Julio César Cumba Gavidia, Daniel Eduardo Choez Solís, Luis Alberto Naranjo Verdesoto, Luis Iván Valdez, Alberto Estupiñán Sandoval y Jefferson Oswaldo Barragán Guzmán responsables de la desaparición y asesinato arbitrario de Walter Tapia, Julio Avilés y Pedro Castro. La corte dictaminó que Sánchez Miño actuó como el autor intelectual del crimen y lo sentenció a 35 años de prisión. La corte sentenció a González, Cumba Gavidia y Choez Solís a 16 años de prisión y a Naranjo Verdesoto, Valdez, Estupiñán Sandoval y Barragán Guzmán a ocho años como cómplices.

El 9 de octubre, el Ministro del Interior anunció que la Policía arrestó a seis oficiales de policía en conexión con el asesinato en el 2012 de George Michael Murillo, que recibió un disparo y murió camino a un partido de fútbol. El caso contra los oficiales no había llegado a juicio hasta fines de año. Inicialmente, la policía aseveró que un seguidor de un equipo rival había asesinado a Murillo, pero en noviembre del 2012, la Fiscalía General abrió una investigación criminal contra tres agentes de policía presumiblemente implicados en el crimen.

La CEDHU informó que el Gobierno abordó solo parcialmente las recomendaciones formuladas en el 2010 por el relator especial para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas en materia de impunidad en casos de asesinato y abusos de las fuerzas de seguridad y sicarios, así como por grupos ilegales armados y las fuerzas militares en el área fronteriza con Colombia. La CEDHU anotó que no había suficiente personal policial asignado a las comunidades fronterizas.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos. El 7 de octubre, el Gobierno anunció la creación de una oficina adscrita a la Policía Nacional para investigar los delitos contra la vida, las muertes violentas, las desapariciones, la extorsión y los secuestros.

c. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la Constitución y las leyes prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informó que algunos oficiales policiales torturaron y abusaron de sospechosos y prisioneros, a veces con impunidad. En el 2010, la Oficina del Defensor del Pueblo reconoció que "la tortura es una práctica enraizada".

La CEDHU informó que la agresión física y el tratamiento cruel e inhumano en los recintos policiales continuaron. Entre enero y octubre, la CEDHU registró 15 casos de supuesta tortura y 131 víctimas de "agresión física injustificada" por parte de las fuerzas de seguridad. La CEDHU también informó que la policía frecuentemente utilizó fuerza excesiva durante los arrestos y que golpeó y amenazó a los sospechosos durante los interrogatorios para forzarlos a confesar los delitos. En un informe del 2012 presentado al Consejo de Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura anotó con preocupación el continuo maltrato a las personas en detención policial.

La ley y la Constitución reconocen el derecho de las comunidades indígenas a ejercer sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres. Hubo preocupación de que ciertos castigos indígenas, como las "purificaciones" (normalmente azotes seguidos de baños en agua fría que causan dolor sobre la piel irritada) violen los derechos humanos.

Condiciones de las prisiones y centros de detención

Las condiciones en las prisiones y en los centros de detención fueron generalmente pobres con tendencia a empeorar en las áreas tropicales de la Costa en comparación con la Sierra de clima más templado.

Condiciones físicas: El hacinamiento continuó siendo un problema en la mayoría de prisiones. La CEDHU informó que las prisiones contenían un promedio de prisioneros del 82 por ciento por encima de su capacidad. El 30 de abril, el Ministro de Justicia informó que el principal centro carcelario de Guayaquil tenía una sobrepoblación del 131 por ciento. Los observadores extranjeros señalaron que muchas de las prisiones en el país enfrentaban un alto riesgo de incendio, en gran parte debido al hacinamiento. El Ministro de Justicia informó el 10 de diciembre que el sistema de prisiones tenía 24.722 prisioneros (de los cuales 2.130 eran mujeres) e informes de medios locales indicaban que la capacidad del sistema era de 12.089 prisioneros. Las autoridades mantenían a los detenidos en prisión preventiva junto con los condenados.

Una cantidad de prisiones experimentaron graves brotes de enfermedades y a menudo la atención médica fue inadecuada. El hacinamiento crónico y la falta de medidas de salud preventivas permitieron que las enfermedades se propagaran rápidamente. La atención médica fue mínima y suficiente solo para casos de emergencia. Los prisioneros informaron que a menudo no hubo medicinas disponibles y que no tuvieron acceso a cuidado odontológico. También, muchos prisioneros informaron de problemas como el asma debido al polvo y a la contaminación y dijeron que no tuvieron acceso a inhaladores. El Ministerio de Justicia informó en el 2012 del fallecimiento de 41 prisioneros, pero no se tuvo información del 2013. Los medios informaron sobre varios escapes durante el año y manifestaron que al menos 63 prisioneros habían escapado de los centros de detención desde el 2010.

Los reclusos informaron que las vulnerabilidades en seguridad continuaron siendo un problema. Por ejemplo, los escáneres de metal en la entrada de un centro penitenciario de Quito no funcionaron o no fueron utilizados. El tráfico de armas continuó y los reclusos compraban y vendían artículos como pistolas, cuchillos y teléfonos celulares.

Los recursos en las prisiones fueron mínimos y las autoridades esperaban que los reclusos o sus familias proporcionaran casi la totalidad de colchones, ropa y medicinas. Las prisiones sirvieron a los reclusos adultos las tres comidas básicas al día, mientras que los reclusos juveniles recibieron cinco comidas al día. Los prisioneros tuvieron acceso a agua potable.

Si bien las condiciones físicas fueron notablemente mejores en la prisión de mujeres de Quito que en la de hombres, de acuerdo con la CEDHU y con informes de los reclusos, guardias hombres estaban a cargo de las prisioneras y éstas informaron que los guardias solicitaron favores sexuales a cambio de mejorar sus condiciones. Ex reclusos informaron que los funcionarios de las prisiones y grupos criminales internos dirigían redes de prostitución desde algunas de las prisiones de mujeres, consiguiendo la participación de las reclusas a cambio de tratamiento preferencial. Los centros de detención proporcionaron

instalaciones de guardería para los niños menores de tres años que no pueden permanecer separados de sus madres.

Administración: Los reclusos informaron haber tenido que pagar coimas a guardias, funcionarios y a otros prisioneros para mejorar la calidad o cantidad de alimentos, tener acceso a la clínica de la prisión, o cambiar o mejorar la celda asignada. Al terminar sus sentencias, la mayoría de reclusos permaneció en prisión tres o cinco meses adicionales debido a la ineficiencia burocrática, la falta de registro sobre la duración de sus sentencias o período de encarcelación y por corrupción.

No hubo mejoras en el sistema de registro durante el año. La mayoría de prisiones continuó dependiendo de archivos físicos y no contaron con acceso a computadores y al Internet. Los prisioneros sentenciados por delitos no violentos pudieron reducir sus sentencias hasta en un 50 por ciento ganando puntos por trabajo, educación y buena conducta. Fue extremadamente difícil obtener de las autoridades de las prisiones, una fecha en firme para ponerlos en libertad y la responsabilidad a menudo recayó en los reclusos para programar sus propias juntas de revisión.

Los reclusos informaron que hay reticencia a presentar quejas contra miembros del personal de la prisión debido al temor de represalias o a la creencia de que sus quejas serían ignoradas. También se informó que las autoridades no investigaron las denuncias sobre condiciones inhumanas. La CEDHU informó de 173 casos de violación de los derechos de los reclusos y detenidos hasta octubre. El 10 de diciembre, el Ministerio del Interior informó que 70 guardias de prisiones en Guayaquil eran investigados por presuntos abusos físicos. No hubo un Defensor del Pueblo en las prisiones. Los prisioneros tuvieron el derecho de apelar a defensores de derechos humanos locales y nacionales, a pesar de que los recursos limitados a menudo dificultaron la efectividad de estas entidades. Los prisioneros estuvieron en libertad de practicar una religión, a pesar que los funcionarios no siempre permitieron que representantes religiosos visiten a los reclusos.

Seguimiento independiente: A pesar que en la mayoría de los casos el Gobierno permitió que observadores independientes de derechos humanos visiten las prisiones, en ocasiones las autoridades no permitieron que visiten a los prisioneros, especialmente durante épocas de disturbios internos. Los funcionarios de prisiones manifestaron que todo funcionario o representante de una ONG, debidamente identificado, podía visitar a los reclusos, aun así los observadores y autoridades algunas veces no pudieron encontrar a los reclusos debido a un deficiente registro y por la corrupción de los funcionarios de las prisiones. Los reclusos pudieron expresar sus preocupaciones y quejas a las organizaciones locales que jugaron un papel importante para transmitir las al defensor de derechos humanos. De acuerdo con el guardia de una de las principales prisiones, los funcionarios limitaron las visitas a la prisión a dos horas, con una visita conyugal por semana por cada recluso.

Mejoras: Durante el año, el Gobierno abrió tres centros de reclusión en la provincia del Guayas con capacidad para 6.480 reclusos. La construcción de los centros carcelarios en otras provincias estuvo también en marcha. El Gobierno además invirtió en la remodelación de cárceles antiguas. De acuerdo con la ex Ministra de Justicia, Johanna Pesántez, en el 2012 el Gobierno gastó un total de \$89 millones (el dólar de los Estados Unidos es la moneda oficial) en la construcción de centros penitenciarios que cumplan con los estándares internacionales y de seguridad, que incluyó la compra de equipo como cámaras de vigilancia. El 2 de abril, el presidente Correa anunció que todos los guardias de prisiones tendrían que pasar por una prueba del detector de mentiras como medida para prevenir la corrupción en las prisiones.

d. Arresto o detención arbitraria

Si bien la Constitución prohíbe el arresto o detención arbitraria, la ley y algunas regulaciones adoptadas por autoridades centrales y provinciales socavan esas garantías.

Papel de la Policía y las Fuerzas de Seguridad

La Policía Nacional mantiene la seguridad interna y vigila el cumplimiento de la ley. Los militares son responsables por la seguridad externa, pero también tienen algunas responsabilidades en la seguridad interna, incluso en el combate al crimen organizado. La Policía Nacional está bajo la autoridad del Ministerio del Interior y el Ejército bajo la supervisión del Ministerio de Defensa.

La corrupción, procedimientos pobres de contratación y capacitación, supervisión y recursos insuficientes impidieron la efectividad de la Policía Nacional. Los abusos policiales persistieron a pesar de los esfuerzos del Gobierno por controlarlos. En algunos casos, en lugar de iniciar una investigación contra los oficiales sospechosos de corrupción, las autoridades policiales los transfirieron a otras unidades y evitaron que se tomen acciones administrativas o judiciales. En otros casos, la policía continuó bloqueando las investigaciones criminales. La agencia de noticias del Gobierno informó la destitución de 340 oficiales policiales entre enero y agosto, incluso 203 en junio, por su participación en delitos que iban desde abuso sexual hasta agresión. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Una unidad de asuntos internos policiales investiga las quejas contra oficiales policiales y puede enviar los casos a las cortes.

La Policía recibe capacitación en derechos humanos como requisito en el entrenamiento básico y en las academias de entrenamiento para unidades especializadas. En la academia policial, la capacitación en derechos humanos está integrada a lo largo de los cuatro años de formación de un cadete. Adicionalmente, hay un régimen de capacitación obligatoria en derechos humanos (Preservación de la Vida y los Derechos Humanos), junto con un manual de derechos humanos. Los grupos de derechos humanos contribuyeron al diseño del curso y a veces se les pidió que participen en módulos del mismo. Las autoridades ofrecieron otro tipo de capacitación en derechos humanos de manera intermitente. El Gobierno continuó mejorando la preparación de la Policía, con mayor financiamiento y salarios y la compra de equipo.

En los casos de violencia colectiva, la Policía a veces no intervino ni respondió de manera oportuna (véase sección 6, Violencia de la Sociedad).

Las investigaciones de la protesta policial del 2010 continuaron. El 31 de mayo, el presidente Correa anunció la creación de una comisión para investigar las protestas e identificar a todos los responsables de la revuelta policial. El Gobierno ofreció una recompensa de \$50.000 por información que lleve a la detención de las personas detrás de la revuelta del 2010. El 26 de marzo, 84 policías y militares fueron colocados bajo investigación y se les ordenó no salir del país debido a su presunto papel en el cierre de una base aérea militar en Quito durante las protestas. El 31 de mayo, el viceministro del interior, Javier Córdova, anunció la detención de Vladimir Cajalombo Mantilla y lo acusó de intento de asesinato del Presidente. Las autoridades liberaron a Cajalombo el 3 de septiembre, pero la investigación continuó. El 9 de julio, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó la apelación de 10 oficiales policiales condenados por rebelión y dictaminó que deben cumplir el total de sus sentencias. El 21 de agosto, la Primera Corte Penal de Pichincha condenó al oficial policial Francisco Guzmán por

la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños, que recibió un disparo durante la rebelión policial.

Procedimientos de detención y tratamiento de detenidos

La ley requiere que las autoridades emitan, por escrito, órdenes de arresto específicas antes de una detención y un juez debe acusar al sospechoso de un delito específico dentro de las 24 horas siguientes a la detención. Las autoridades generalmente observaron este límite de tiempo, a pesar de que en algunas provincias la detención inmediata fue a menudo considerablemente más larga. Los detenidos tienen el derecho de estar informados de los cargos contra ellos. De acuerdo con la ley, si el informe inicial de la investigación es perjudicial, el juez, a pedido del fiscal, puede ordenar la detención preventiva.

Las personas detenidas pueden objetar la legalidad de su detención a través de un recurso de *habeas corpus* presentado ante cualquier juez del lugar en donde se realizó la detención, y no hay límite de tiempo dentro del cual se lo deba presentar. El detenido puede también solicitar fianza u otras alternativas a la prisión preventiva. Tales alternativas (por ejemplo, arresto domiciliario o libertad condicional) se permiten solo en casos de delitos punibles con prisión de menos de cinco años.

Las autoridades encargadas de determinar la validez de la detención a menudo permitieron que se presenten acusaciones infundadas, ya sea porque tenían exceso de trabajo o porque percibían presiones políticas externas. Las autoridades frecuentemente utilizaron el sistema como medio de acoso en casos civiles en los cuales una de las partes trataba que se arreste a la otra con una acusación penal.

Los detenidos tienen el derecho constitucional de contar con un abogado. Si es indigente, tiene el derecho de solicitar un abogado nombrado por la corte. La oficina autónoma de defensores públicos proporcionó asesoría legal gratuita a los acusados. A pesar que el número disponible de defensores nombrados por las cortes fue mayor en comparación a años anteriores, el poco tiempo que tuvieron para preparar la defensa de los detenidos continuó siendo una desventaja durante los juicios.

A pesar que la ley prohíbe la incomunicación durante una detención, las organizaciones de derechos humanos continuaron informando de violaciones ocasionales. La ley autoriza al detenido el acceso inmediato a abogados y familiares, pero se dieron demoras dependiendo de las circunstancias y la disposición de los oficiales para hacer cumplir la ley. Presuntos narcotraficantes comúnmente esperaron de 24 a 48 horas para dichas visitas. Se informó que los detenidos con suficientes recursos sobornaron a los oficiales para facilitar el acceso. La CEDHU informó que las instalaciones de la Policía Antinarcóticos y de la Policía Judicial que mantienen a las personas para investigación preliminar, a menudo no permitieron visitas de familiares o abogados.

Arresto arbitrario: La CEDHU informó de 24 casos de arresto arbitrario. Muchas víctimas decidieron no presentar acusación legal por temor a represalias, falta de recursos, o temor de no tener un juicio justo debido a la corrupción policial y judicial.

El 25 de febrero, la corte dictaminó que "Los 10 de Luluncoto" eran culpables de intento de terrorismo y los sentenció a un año de prisión. La corte liberó a dos acusados por el tiempo cumplido. La Policía detuvo a los 10 acusados en marzo del 2012 y los acusó de pertenecer a una organización terrorista involucrada en una serie de bombas panfletarias. Las ONGs de derechos humanos afirmaron que la Policía realizó el operativo sin la orden judicial

correspondiente y que no notificó a los acusados de los cargos, una afirmación que fue desmentida por la Fiscalía. Los fiscales sustituyeron la acusación original de terrorismo por intento de terrorismo debido a la falta de evidencia que vinculara a los acusados con las explosiones. El 26 de febrero, los abogados de la defensa anunciaron que apelarían el veredicto porque los cargos bajo los cuales los acusados fueron condenados diferían del cargo original, una práctica que no es permitida por la ley. El 9 de diciembre, una corte ratificó la sentencia, a pesar de que los acusados podían apelar ante la Corte Nacional de Justicia.

Prisión preventiva: El Gobierno calculó que el 36 por ciento de prisioneros no habían recibido sentencia. La CEDHU informó que la gran mayoría de individuos en los centros de rehabilitación en todo el país continuaba detenida sin sentencia. Las demoras en los juicios fueron causadas por procedimientos judiciales largos y complicados; corrupción y escasa capacitación de la Policía, fiscales, defensores públicos y jueces; y en general por la ineficiencia judicial. Muchas de las víctimas abandonaron sus casos y no presentaron cargos, en parte debido al costo que representa tener un abogado y sobornar a las autoridades judiciales.

e. Privación de un juicio público imparcial

Si bien la Constitución establece un poder judicial independiente, éste fue susceptible a presiones externas y corrupción. Los medios informaron sobre la susceptibilidad del poder judicial a coimas para emitir decisiones favorables y para resolver con mayor rapidez ciertos casos. Los jueces ocasionalmente llegaron a decisiones basadas en la influencia de los medios o en presiones políticas y económicas. A menudo, ocurrieron demoras en demandas presentadas contra el Gobierno, mientras que las demandas presentadas por el Gobierno se procesaron rápidamente en las cortes.

En algunos casos, el resultado de los juicios pareció predeterminado. Después de que la Fiscalía desestimara por falta de pruebas los cargos de rebelión contra 12 estudiantes involucrados en una protesta por temas educativos en el Colegio Central Técnico de Quito, el presidente Correa anunció que su Gobierno encontraría la evidencia y la proporcionaría al Fiscal. La Fiscalía General reabrió el caso a finales de abril y el 13 de junio un juez ordenó que los 12 estudiantes sean juzgados por rebelión. En el período previo a la sentencia definitiva, varios funcionarios gubernamentales definieron a los estudiantes como "desestabilizadores de la democracia". El 29 de julio, una corte declaró a los estudiantes culpables y los sentenció a 21 días de prisión, a pesar de que fueron inmediatamente liberados ya que todos habían pasado al menos 24 días en prisión. Los estudiantes perdieron una apelación el 28 de noviembre.

Procedimientos judiciales

Por ley, se presume la inocencia de los acusados hasta que no se pruebe su culpabilidad en un juicio. No hay jurados en el sistema judicial. Los acusados tienen derecho a ser informados con rapidez y en detalle sobre los cargos, incluso tener interpretación gratuita cuando sea necesario, a pesar de que hubo informes confirmados de extranjeros enjuiciados y condenados sin acceso a un traductor. Todos los ciudadanos tienen el derecho a un juicio público, a pesar de que frecuentemente se produjeron demoras. El acusado tiene derecho de consultar con un abogado o que se le proporcione uno y el derecho de apelar. Los acusados pueden presentar pruebas y llamar a testigos, invocar el derecho a no autoinculparse, y a confrontar e interrogar a los testigos. Los acusados tienen el derecho de acceder a las pruebas mantenidas por la Policía o el Fiscal público; sin embargo, este

derecho fue inconsistentemente ejercido debido a que muchos acusados lo desconocían y no tuvieron representación legal que los ayudara en su preparación. Las autoridades, generalmente, no informaron a los acusados de su derecho a acceder a las pruebas policiales.

A pesar de los esfuerzos por modernizar el sistema judicial, el poder judicial continuó funcionando con lentitud e inconsistencia. Hubo grandes retrasos antes de que la mayoría de los casos fueran juzgados. Se informó que los jueces emitieron algunas decisiones más rápido que otras debido a presiones políticas o, en algunos casos, al pago de coimas. Las fallas en el sistema de justicia contribuyeron a casos en los cuales las comunidades tomaron la ley por sus propias manos y recurrieron a la violencia contra los presuntos delincuentes.

Las recientes reformas a la justicia penal encaminadas a reducir el congestionamiento de expedientes penales produjeron procesos "simplificados" en las etapas previas al juicio, resultando en procesos sumarios contra acusados con poca o ninguna protección del debido proceso. El 31 de agosto, el presidente Correa destacó la creación de unidades judiciales para resolver casos flagrantes (encontrados en el acto) con mayor rapidez. El tiempo de procesamiento para este tipo de casos disminuyó de 190 a 47 días. En estos procesos, los acusados deben escoger entre impugnar los casos y enfrentar una dilatada prisión preventiva, o aceptar la responsabilidad penal y declararse culpable en la presentación de los cargos, aun cuando haya poca o ninguna investigación o no haya evidencia de culpabilidad.

El sistema judicial ordinario juzgó a la mayoría de acusados, a pesar de que algunos grupos indígenas juzgaron a sus miembros independientemente por violaciones contra la ley tribal. Si bien la ley y la Constitución reconocen el derecho de las comunidades indígenas a ejercer sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres, no especifican cómo debe ejercerse este derecho. Este sistema paralelo planteó cuestiones tanto de jurisdicción, de conformidad con el derecho a un juicio justo, así como sobre la posibilidad de obtener resultados inconsistentes entre los dos sistemas.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de detenidos o presos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Las cortes civiles y el Tribunal Contencioso Administrativo, generalmente considerados independientes e imparciales, tramitan demandas por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos y demandas del cese de dichas violaciones. Sin embargo, las demandas civiles por daños causados por supuestos agravios por parte del Estado se presentaron en raras ocasiones, puesto que ese tipo de demandas son lentas y difíciles de procesar y los jueces pueden demorar hasta una década para pronunciarse sobre el tema de fondo.

Decisiones de la Corte Regional de Derechos Humanos

El Gobierno está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de julio, el Gobierno cumplió con un dictamen de la corte y pagó a la comunidad indígena Sarayaku \$1.3 millones en indemnización por daños y perjuicios derivados de la

exploración petrolera en su territorio previa al 2003. El Gobierno continuó revisando los requisitos adicionales pendientes de acuerdo con el dictamen de la corte.

Interferencia arbitraria en la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La Constitución y las leyes prohíben tales acciones y el Gobierno generalmente respetó esas prohibiciones.

Sección 2. Respeto a las libertades civiles, que incluyen

a. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, pero el Gobierno restringió esos derechos.

Libertad de expresión: El presidente Correa y su Gobierno continuaron durante el año con los ataques verbales y legales contra la prensa. El Presidente de manera regular manifestó que la prensa fue su "peor enemigo". Durante su cadena semanal de radio y televisión, el Presidente continuó exhortando a los funcionarios gubernamentales y a los particulares para que presenten denuncias contra los medios, lo que llevó a una mayor autocensura de los medios. Los funcionarios gubernamentales, en su calidad de "ciudadanos privados" a veces presentaron denuncias contra los medios. Las ONGs y las organizaciones internacionales de derechos humanos continuaron expresando su preocupación por ese discurso que criminaliza a los medios y por el efecto desalentador que han tenido las demandas sobre muchos periodistas.

En general, las personas pudieron criticar al Gobierno pública y privadamente sin represalias, a pesar de que una nueva ley de comunicación aprobada en junio restringió el espacio abierto para la crítica. Esta nueva ley crea nuevos entes reguladores con poder para monitorear y disciplinar a los medios a través de una combinación de sanciones legales y administrativas. Según "Human Rights Watch", la ley "socava gravemente la libertad de expresión" y la limita. Independientemente de esta ley, es ilegal amenazar o insultar al Presidente o al poder ejecutivo y los infractores pueden recibir penas que van desde seis meses a dos años de prisión y multas desde \$16 hasta \$77.

Libertad de prensa: Los medios independientes en general permanecieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista, incluyendo a aquellos críticos al Gobierno. "Freedom House" bajó la evaluación del país de la categoría "parcialmente libre" en el 2012 a "no libre" en el 2013, anotando un dramático descenso de la libertad de prensa en los últimos cinco años. El Gobierno poseía y operó al menos 21 medios y un periódico y utilizó un extenso presupuesto para publicidad para influenciar en el debate público. La ley ordena la transmisión gratuita de mensajes e informes del Presidente y de miembros de su Gabinete. El Gobierno requirió cada vez más que las estaciones transmitieran las declaraciones del Presidente y de otros líderes, reduciendo, en consecuencia, la programación privada pagada de dichas estaciones. El Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación de que la excesiva frecuencia de tales mecanismos impida que los medios escojan qué información difundir como parte de su ejercicio de libre expresión. La Oficina del Relator Especial manifestó: "Si estas cadenas se emiten con demasiada frecuencia, la consecuencia será que los medios no oficiales estarán transmitiendo permanentemente el mensaje oficial del Estado, en detrimento de su propia línea editorial".

La ley limita la propiedad de medios de comunicación. La nueva ley de comunicación redefine las asignaciones de las frecuencias, dando un 33 por ciento de frecuencias a los medios privados, un 33 por ciento a los medios públicos y un 34 por ciento a los medios comunitarios. Los observadores afirmaron que la redistribución de frecuencias podría reducir la cobertura de medios privados en aproximadamente un 50 por ciento. El Gobierno afirmó en declaraciones públicas que la información era un bien público en lugar de un derecho.

Las disposiciones del Código de la Democracia limitan la capacidad de los medios de proporcionar cobertura durante el período oficial de campaña electoral. Un fallo de la Corte Constitucional confirmó el derecho de la prensa a realizar entrevistas y presentar informes especiales sobre los candidatos y los temas durante el período de campaña, pero mantuvo restricciones sobre promoción "directa o indirecta" de los candidatos o sus puntos de vista políticos específicos.

Violencia y acoso: El presidente Correa frecuentemente utilizó las cadenas obligatorias y sus apariciones públicas para hacer ataques personales contra periodistas específicos, así como para criticar a los medios, cuestionar su competencia y profesionalismo y acusar a los medios privados de ser parciales. Durante el año, Correa se refirió a los periodistas como "enfermos", "ignorantes", "siniestros" y "mentirosos". El Presidente en repetidas ocasiones se refirió a los medios independientes como "la prensa corrupta".

Hasta el 12 de diciembre, la ONG Fundamedios informó de 174 casos de acoso (amenazas, ataques verbales y físicos, o arrestos) contra periodistas y otros representantes de la prensa.

El 11 de abril, un conocido periodista de investigación, Fausto Valdiviezo, fue asesinado frente a la casa de su madre en Guayaquil. El Ministro del Interior, José Serrano, indicó que el asesinato probablemente no estuvo relacionado con el trabajo de Valdiviezo y sugirió que habría estado involucrado en asuntos cuestionables. Los colegas de Valdiviezo solicitaron que la Fiscalía realizara una investigación más exhaustiva y las organizaciones de periodistas expresaron el temor de que su muerte pudiera haber sido un acto de retaliación por sus denuncias sobre redes criminales clandestinas. El 25 de septiembre, un juez liberó a tres sospechosos detenidos, a pesar de que todavía enfrentaban cargos como cómplices de asesinato y les pidió que se presentaran periódicamente ante la corte. El juez liberó a otro sospechoso y retiró todos los cargos en su contra. Un sospechoso continuaba en custodia, mientras el presunto autor intelectual del crimen permanecía prófugo.

Censura y restricción de contenido: La relación entre la prensa y el Gobierno fue pobre debido a la considerable presión que ejerció el Gobierno contra la prensa y las acciones legales y administrativas contra ella. Los periodistas que trabajan en medios privados informaron de instancias de censura indirecta y manifestaron que los ataques del presidente Correa causaron autocensura en la práctica.

La ley de comunicación requiere que los medios "cubran y transmitan hechos de interés público" y define la omisión como una forma de censura previa. El Superintendente de Información y Comunicación decide los casos de censura previa y puede imponer multas.

La ley de comunicación también impone cupos de contenido local a los medios, que incluyen un requisito de un mínimo del 60 por ciento de contenido producido domésticamente en televisión y 50 por ciento en radio. Adicionalmente, la ley requiere que la publicidad sea producida en el país y prohíbe cualquier publicidad que se considere de naturaleza sexista,

racista o discriminatoria. Más aún, el Ministerio de Salud Pública debe aprobar toda la publicidad de alimentos y medicinas.

Los medios privados informaron que el Gobierno continuó utilizando inspecciones fiscales y laborales para acosar a las compañías que publicaron informes críticos contra el Gobierno. Estas investigaciones forzaron a las compañías a emprender laboriosos y costosos procesos de defensa legal. El Gobierno continuó utilizando estas regulaciones para cerrar medios de comunicación. Los periodistas afirmaron que el Gobierno, adicionalmente, utilizó el proceso de renovación del espectro de frecuencias como evaluación política subjetiva de cada estación en lugar de una revisión técnica.

El 8 de agosto, el Consejo Nacional de Comunicaciones, ordenó que Radio Ecotel en la provincia de Loja interrumpiera la emisión en su frecuencia, aduciendo que no había hecho los ajustes técnicos requeridos para cumplir con su licencia. El Director de Ecotel, Ramiro Cueva, afirmó que el cierre era ilegal ya que la estación tenía un caso pendiente frente a un ente de apelaciones administrativas que debía mantener la concesión de la frecuencia válida hasta que el tema se resuelva. Cueva además afirmó que el cierre tenía motivaciones políticas debido a la línea editorial crítica de la estación. El 12 de agosto, una corte de Loja rechazó la orden de protección solicitada por Cueva para evitar el cierre de la estación. Casi 100 policías irrumpieron en la estación el 5 de diciembre para incautar el equipo de Ecotel.

El Gobierno continuó siendo el mayor anunciante individual en el país y utilizó los contratos de publicidad para recompensar o castigar a los medios.

Leyes de difamación/seguridad nacional: El Gobierno utilizó cada vez más mecanismos legales, incluso las leyes de difamación, contra los medios, los periodistas y los ciudadanos privados. Fundamedios informó de 43 denuncias contra periodistas o medios desde el 2008, cinco de las cuales fueron presentadas durante el año. La difamación es un delito penal bajo la ley con castigos de hasta tres años de prisión más multas y daños.

El 17 de abril, un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a Clever Jiménez, miembro de la Asamblea Nacional, a 18 meses de prisión por cargos de calumnia, dictaminando que la inmunidad parlamentaria no aplicaba en su caso. La demanda, presentada personalmente por el presidente Correa, se basó en un juicio que Jiménez había presentado contra Correa en el 2011, en el cual Jiménez afirmaba que el 30 de septiembre del 2010 Correa mismo había ordenado a las Fuerzas Armadas que lo rescataran del hospital de la Policía, lo que resultó en varios heridos y muertos. El juez ordenó que Jiménez y el activista Fernando Villavicencio, que también fue sentenciado a 18 meses, pagaran reparaciones por aproximadamente \$120.000 y presentaran una disculpa en un medio de circulación nacional. El juez sentenció al activista Carlos Figueroa a una sentencia y multas menores. El 24 de julio, el juez de la CNJ negó la apelación inicial de Jiménez y sus codemandados presentaron una apelación final a la CNJ.

La ley incluye cargos penales de difamación que podrían utilizarse para criminalizar la opinión. La ley de comunicación asigna responsabilidad previa a los dueños de los medios como responsables por los artículos de opinión o declaraciones realizadas por los reporteros u otras personas, incluso los lectores, que utilicen sus plataformas.

La nueva ley de comunicación incluye una prohibición de "linchamiento mediático", que la ley describe como la "difusión coordinada y repetitiva de información directamente o a través de terceros en los medios, con la intención de desacreditar a una persona o empresa o reducir su credibilidad pública". Los términos exactos de esta disposición continuaban

definidos con ambigüedad pero amenazaban con limitar la capacidad de los medios de realizar reportajes investigativos. El Superintendente de Información y Comunicación tiene autoridad para determinar si un medio de comunicación es culpable de linchamiento mediático y aplicar las sanciones administrativas.

En respuesta a un titular del 31 de mayo que decía "Correa llama novedad al matrimonio gay", el Secretario de Comunicación y el presidente Correa acusaron al periódico *Hoy* de malinterpretar las palabras del Presidente. El Defensor de Derechos Humanos, Ramiro Rivadeneira, presentó una queja contra *Hoy* el 19 de junio, aduciendo que el periódico infringió los derechos de la comunidad GLBT con el reportaje impreciso. La juez Verónica Medina aceptó la queja y ordenó que *Hoy* publicara una disculpa y una corrección. El periódico cumplió con la orden judicial con una disculpa a la comunidad GLBT titulada "Hoy se disculpa con la comunidad GLBT a quien no ofendimos". El presidente Correa desestimó la disculpa de *Hoy* por superficial y mencionó que el periódico tendría que disculparse nuevamente y pagar una multa por todos los gastos legales en los que incurrió el Gobierno.

En septiembre, una ONG presentó una demanda suscrita por 60 ciudadanos contra la ley de comunicación. La demanda afirma que la ley contraviene la Constitución y los compromisos del país bajo los tratados internacionales de derechos humanos, así como los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La demanda además impugna la afirmación del Gobierno de que la información es un bien público en lugar de un derecho. Hasta el fin del año, la Corte no había tratado la demanda.

Libertad en Internet

El Gobierno no restringió el acceso al Internet y no hubo informes confiables de que el Gobierno monitoreara el correo electrónico o las salas de Internet sin autorización legal apropiada. Una regulación de telecomunicaciones del 2012 requiere que quienes ofrecen servicios de Internet cumplan con todos los pedidos de información del Superintendente de Telecomunicaciones, permitiendo acceso a la dirección e información de los clientes sin una orden judicial. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que el 35 por ciento del público utilizó el Internet en el 2012. La ONG "Freedom House" evaluó el Internet como parcialmente libre.

Si bien las personas y grupos pudieron generalmente participar en la expresión de opiniones vía Internet, incluso por correo electrónico, el Gobierno controla cada vez más Twitter y otras cuentas de medios sociales para monitorear amenazas o presuntos insultos contra el Presidente, una práctica que "Freedom House" denominó "una forma de intimidación ilegal que va a resultar en mayor autocensura en línea". La ley de comunicación hace al medio responsable por los comentarios en línea de los lectores, si el medio no ha establecido mecanismos para que quienes comentan registren sus datos personales (incluso su cédula de identidad) o no ha creado un sistema para borrar los comentarios ofensivos. La ley además prohíbe que los medios utilicen la información obtenida en los medios sociales a menos que puedan verificar quién es el autor de la información. De acuerdo con "Freedom House": "No hay leyes específicas que criminalicen el contenido en línea, sin embargo, se aplican las leyes de difamación estándar al contenido publicado en línea y a veces estas son invocadas por el Gobierno". Los funcionarios gubernamentales también sugirieron que los medios sociales fueran regulados y que la difamación en ellos fuera castigable bajo el código penal, con sentencias de hasta dos años de prisión.

Libertad académica y de actos culturales

No hubo restricción gubernamental de la libertad académica o de actos culturales. Los académicos informaron que la intimidación de funcionarios gubernamentales, incluso del presidente Correa y la preocupación por el proceso de adjudicación de contratos del Gobierno crearon un efecto desalentador y llevaron a una autocensura.

b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

Libertad de reunión

La ley establece la libertad de reunión pacífica. El Gobierno respetó este derecho, con algunas excepciones. Las manifestaciones públicas requirieron de permisos gubernamentales previos que usualmente fueron concedidos. El Gobierno a menudo desplegó una gran presencia de seguridad en las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad generalmente respetaron los derechos de los participantes, pero hubo algunas excepciones.

En los últimos años, el Gobierno presentó acusaciones legales o abrió investigaciones contra manifestantes que bloquearon las carreteras o impidieron la prestación de servicios públicos, citando a los manifestantes por "terrorismo y sabotaje" o acusaciones similares que efectivamente criminalizaron las protestas. En diciembre de 2012, la Corporación Centro de Investigaciones de Comunicación del Ecuador emitió un informe que menciona que aproximadamente 47 líderes indígenas, representantes de asociaciones de comercio y estudiantes, enfrentaron procesos legales por acusación de cometer actos de sabotaje y terrorismo. El informe explicó que muchos de esos procesos se iniciaron en el 2010 y la mayoría continuaban congelados en la etapa de investigación. Los grupos indígenas calcularon que las autoridades habían acusado a aproximadamente 200 de sus miembros por terrorismo y sabotaje.

El 19 de julio, una corte de apelación ratificó la condena del miembro de la Asamblea Nacional Pepe Acacho también líder de la organización indígena Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por cargos de sabotaje y terrorismo. Los cargos se derivan del fallecimiento de un profesor durante las protestas indígenas contra los cambios a la ley de aguas en el 2009. Las autoridades originalmente detuvieron a Acacho en el 2011 y lo acusaron de incitar a las protestas violentas a través de su programa de radio. La corte también condenó al líder indígena Pedro Mashiant, al tiempo que exculpó a otros cinco pocos días antes. La corte sentenció a Mashiant y a Acacho a 12 años de prisión; la apelación de los acusados continuaba pendiente.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de asociación, pero el Gobierno dio pasos para limitar este derecho. El Decreto Presidencial 16, emitido en junio, requiere que todas las organizaciones sociales (incluso las ONGs), se registren previamente en un sistema en línea dentro de un año o enfrenten disolución. La ley establece la discreción del Gobierno para disolver organizaciones (incluso las de la sociedad civil, las fundaciones y las iglesias) por múltiples razones que incluyen comprometer los intereses del Estado, involucrarse en actividades políticas, amenazar la paz pública, desviarse del propósito establecido de la organización, o no proporcionar acceso a la información requerida por el Gobierno. Las regulaciones del Decreto limitan la capacidad de las organizaciones para escoger a sus miembros. El Decreto requiere que las ONGs informen sobre todos sus proyectos que reciban financiamiento externo. El 13 de septiembre, una corte desestimó la impugnación legal inicial del Decreto presentado por organizaciones de la sociedad civil. "Human Rights Watch" hizo un llamado al Gobierno para derogar el Decreto 16, porque limita el derecho a la libre asociación. Las

ONGs también informaron acoso con inspecciones fiscales y laborales. El 4 de diciembre, el Gobierno invocó el Decreto 16 cuando cerró la Fundación Pachamama, una ONG ambientalista que se oponía a la explotación petrolera en la Amazonía. El Gobierno dijo que la organización perturbó el orden público durante una protesta el 28 de noviembre contra la última ronda de negociaciones petroleras del Gobierno con firmas extranjeras.

c. Libertad de religión

Véase el [Informe de Libertad Religiosa Internacional](#) del Departamento de Estado.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, los viajes al exterior, la emigración y repatriación y el Gobierno generalmente respetó estos derechos.

El Gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para proporcionar protección y ayuda a los desplazados internos, refugiados, refugiados que retornan, a quienes buscan asilo, a los apátridas y a otras personas vulnerables de interés. Los cambios en el proceso de asilo, que surgen del Decreto Presidencial 1182 de mayo del 2012, dieron como resultado menos personas con acceso al proceso de determinación de situación de refugio y una tasa mucho menor de aprobación de solicitudes de refugio. El Gobierno otorgó el estatus de refugiado a menos del 10 por ciento de los solicitantes en el 2013.

Protección de refugiados

Acceso al asilo: La ley establece la otorgación de asilo o el estatus de refugiado y el Gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. ACNUR informó que hasta el 30 de julio, había 55.141 refugiados reconocidos en el país, 98 por ciento de los cuales eran colombianos. La ley establece un procedimiento de dos pasos para quien busca solicitar el estatus de refugiado, con derecho a apelar un rechazo en la segunda etapa del proceso.

En parte debido a una reacción política negativa, en mayo del 2012, el Gobierno ajustó significativamente el proceso de asilo retirando "violencia generalizada" como base para el asilo, limitando las solicitudes de asilo a personas que habían ingresado al país durante los 15 días previos y aprobando oficialmente la inclusión de una entrevista de elegibilidad. ACNUR calculó que luego de instaurado el nuevo procedimiento, entre la entrevista previa de elegibilidad y el panel de determinación, el Gobierno negó el refugio a casi el 94 por ciento de solicitantes. Previamente, el Gobierno otorgaba ese estatus a entre el 80 y 90 por ciento de solicitantes.

El proceso de registro a menudo tomó de seis meses a un año y, ocasionalmente, más de un año. Durante el proceso de solicitud, el solicitante recibe una tarjeta, renovable cada dos meses, la cual le otorga el derecho a trabajar hasta que se adjudique el estatus y haya agotado todas las apelaciones. El estatus de refugiado es válido por dos años pero puede ser renovado.

Principio de no devolución: ACNUR no tenía información sobre la devolución de refugiados reconocidos o solicitantes de asilo durante el año; sin embargo, informó que en el 2012 conoció de 22 casos de devolución e intervino para evitar 79 otros casos.

Abuso de refugiados: Los refugiados, especialmente mujeres y niños, experimentaron violencia sexual y de género y los jóvenes experimentaron reclutamiento forzoso en las áreas fronterizas.

Acceso a servicios básicos: La ley establece que los refugiados reconocidos y solicitantes de asilo tengan el mismo acceso a servicios de salud pública que sus ciudadanos. La presentación de cualquier documento de identidad es suficiente para proporcionar acceso a instituciones de educación pública. ACNUR informó que en algunos casos los niños de no ciudadanos experimentaron dificultades para matricularse en la escuela debido a problemas con los números de identificación de refugiados. Los refugiados informaron discriminación generalizada en cuanto al empleo y la vivienda. Los estereotipos de la sociedad y los informes de prensa a menudo presentaron a los refugiados como criminales y prostitutas, lo que afectó su capacidad para asimilarse a la población local.

Soluciones duraderas: Pocos refugiados pudieron naturalizarse como ciudadanos o adquirir residencia permanente debido al proceso legal largo y costoso que se requiere. Cinco refugiados colombianos voluntariamente fueron repatriados a Colombia con la ayuda del ACNUR en el 2012. La principal solución duradera continúa siendo la integración local, a pesar de que hubo muchos obstáculos para lograr una integración local sustentable. Entre enero y septiembre 30, ACNUR presentó 1.346 personas para reasentamiento en un tercer país y 812 personas salieron al nuevo país.

Protección temporal: El Gobierno también proporcionó protección temporal a personas que pueden no calificar como refugiados. El Gobierno y las ONG proporcionaron ayuda humanitaria y servicios adicionales legales, de salud, educación y ayuda psicológica a colombianos registrados que habían cruzado la frontera durante el año. La mayoría de la ayuda gubernamental terminó al negárseles el estatus oficial de refugiado.

Sección 3. Respeto por los derechos políticos: derechos de los ciudadanos a cambiar su gobierno

La ley establece el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno pacíficamente y los ciudadanos ejercitaron el derecho a través de elecciones periódicas y libres basadas en el sufragio universal.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: El 17 de febrero, el Gobierno llamó a elecciones para dignidades nacionales como la presidencia y la Asamblea Nacional. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Unión de Naciones Suramericanas –además de observadores nacionales—consideraron las elecciones abiertas, libres y bien organizadas, a pesar de algunas irregularidades locales recurrentes y limitadas. A pesar que los equipos nacionales e internacionales de observadores no informaron sobre un fraude mayor, hubo algunos informes de papeletas faltantes o marcadas y sobre irregularidades en el conteo y cálculo de votos que resultaron en impugnaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que son entes de apelación para asuntos electorales. Los candidatos de la oposición afirmaron que el CNE y el TCE no abordaron las irregularidades de manera transparente. La

OEA informó que el período previo de campaña se distinguió por “acceso y exposición diferenciada de los contendores en los medios”. Más aún, durante el período de campaña hubo una cobertura desigual de los partidos y los candidatos en los informes de prensa, dependiendo de la propiedad del medio. De acuerdo con el monitoreo de medios de la ONG “Participación Ciudadana”, el presidente Correa tuvo una presencia significativamente mayor que otros candidatos tanto en los medios públicos como privados.

Partidos políticos: Las leyes electorales requieren que los partidos políticos se registren en el CNE. Para recibir autorización para participar en las elecciones, los partidos y movimientos necesitan demostrar apoyo de al menos el 1.5 por ciento del padrón electoral, recolectando firmas. La ley requiere que los partidos registrados obtengan niveles mínimos de apoyo de votantes para mantener su registro. Los votantes están limitados a registrarse con un solo grupo político.

Un escándalo con el registro de partidos y problemas en el proceso de registro dentro del CNE en el 2012 demoró el registro de partidos por varias semanas, limitando su capacidad para organizarse y llevar a cabo elecciones primarias. El CNE no autorizó a varios partidos en todo el país para participar en las elecciones del 2013 debido a irregularidades con las firmas presentadas para su registro. El escándalo además demoró otras importantes decisiones del CNE, como un nuevo plan de zonificación en las tres provincias más grandes. Los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil criticaron el proceso de revisión del registro y el plan de zonificación y se quejaron de que el CNE no actuó con suficiente transparencia.

Participación de las mujeres y minorías: La Constitución establece una representación fomentada por el Estado y de equidad de género en el sector público, incluso en las listas de candidatos de los partidos políticos para la Asamblea Nacional y otras instituciones representativas. La ley electoral ordena que las listas electorales tengan equidad de género y sean estructuradas con un patrón que alterne hombres y mujeres (o viceversa) para los candidatos tanto principales como suplentes.

Hubo 58 mujeres en la Asamblea Nacional de 137 escaños y 9 mujeres miembros del Gabinete. La presidenta, así como las dos vicepresidentas de la Asamblea Nacional son mujeres. Hubo nueve indígenas y siete afroecuatorianos en la Asamblea Nacional. No hubo afroecuatorianos o indígenas en el Gabinete.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción oficial. El gobierno no implementó la ley efectivamente y a veces funcionarios se involucraron en prácticas corruptas con impunidad.

El gobierno reconoció una corrupción amplia en la rama judicial y continuó un proceso de reforma judicial. El proceso de reforma mejoró de alguna manera la capacidad de la justicia para servir al público a través de infraestructura y tecnología, el retiro de jueces corruptos o incompetentes y la reducción del número de casos pendientes. Sin embargo, observadores independientes notaron que los jueces en las cortes superiores parecían más cercanamente alineados con la administración actual y algunos cuestionaron la independencia de dichas cortes. Algunos académicos y analistas de centros de estudio dijeron que las cortes no procesaron casos legales, a menos que la policía y funcionarios judiciales fueran sobornados. Hubo reportes de prensa que señalaban corrupción policial y extensa corrupción en adquisiciones y contratos públicos.

Líderes laborales y empresarios reportaron corrupción entre inspectores laborales (véase sección 7.d)

Corrupción: El 12 de abril, Juan Salazar López, alcalde de Riobamba, informó del robo de \$13.3 millones de la cuenta del municipio en el Banco Central del Ecuador, de los cuales solo \$10 millones habían sido recuperados. Inicialmente, Salazar dijo que hackers habían infiltrado la cuenta y robado el dinero, pero al final las investigaciones encontraron que Salazar entregó la clave de la cuenta a varias personas no autorizadas. El 24 de abril, el consejo municipal aprobó la remoción del alcalde. La fiscalía acusó a Salazar de malversación de fondos.

Hasta el final del año no se había llegado a una resolución en las investigaciones sobre el ex presidente del Banco Central Pedro Delgado, que salió del país en diciembre del 2012 luego de anunciar que había falsificado sus diplomas académicos y rehusó a regresar para el interrogatorio. El gobierno investigó los préstamos irregulares autorizados por Delgado.

La rama de transparencia y control social del gobierno (CPCCS) está a cargo de diseñar políticas para la promoción de la transparencia, control y responsabilidad en los sectores público y privado y lidera el Plan Nacional contra la Corrupción. Dentro de la rama de transparencia, la Oficina del Contralor General investiga los reportes de corrupción en el sector público. Cuando hay justificación para una investigación criminal, el contralor refiere el caso a la Oficina del Fiscal. Los observadores notaron que la CPCCS no involucró a un amplio segmento de la sociedad civil y que su liderazgo tenía vínculos cercanos con el partido gobernante. La Secretaría Nacional de Transparencia, parte de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, tiene también responsabilidad de investigar y reportar las quejas de corrupción en el sector público.

Protección de informantes: La ley establece la protección de los empleados públicos que revelan actos de corrupción, pero no hubo mecanismos suficientes para evitar la retaliación de sus supervisores y colegas. En algunos casos, las ONG de derechos humanos reportaron el despido de empleados públicos luego de que denunciaran actos de corrupción. La Fiscalía tiene un programa para protección a víctimas y testigos. La ley permite acceso a entidades independientes de resolución de disputas. En el sector privado, la persona que informa de actos de corrupción tiene el peso de la prueba. No existe prescripción en casos para denunciar de retaliación u otras acciones discriminatorias, tanto en los sectores público y privado.

Revelación de datos financieros: Se requiere que los funcionarios gubernamentales declaren su situación financiera al asumir su cargo y en caso de una investigación, igualmente todas las agencias deben divulgar anualmente información sobre salarios. La Constitución requiere que los servidores civiles presenten una declaración juramentada sobre sus haberes al principio y al final de su mandato, incluyendo activos y pasivos, así como una autorización para levantar la confidencialidad de sus cuentas bancarias. La Contraloría General del Estado tiene la responsabilidad de monitorear y verificar la información divulgada, examinar los estados e investigar aquellos casos en donde se sospecha enriquecimiento ilícito. La información divulgada puede ponerse a disposición del público a pedido de una parte interesada. Todas las declaraciones se presentan en las notarias públicas y se convierten en escritura pública. El sitio web de la Contraloría General tiene una sección en la cual el público puede hacer una búsqueda sobre funcionarios para ver si cumplen con la divulgación requerida de ingresos y activos. No hay sanciones penales o administrativas por el no cumplimiento, solamente la incapacidad de asumir el cargo. La Contraloría General del Estado puede reportar cualquier acción o actividad inusual a otros funcionarios

gubernamentales, los que a su vez podrían iniciar sus propias investigaciones. Los funcionarios públicos no están obligados a presentar informes periódicos, aun cuando se produzcan cambios en sus participaciones financieras.

Acceso público a la información: La Constitución y otras regulaciones establecen el derecho al acceso público a la información gubernamental. Sin embargo, las autoridades no pusieron efectivamente la ley en práctica. La ley requiere que todas las organizaciones (públicas y privadas) que reciben fondos públicos respondan a pedidos escritos de información, publiquen la información específica en sus sitios web y presenten un informe anual ante la Oficina de la Defensoría del Pueblo con detalles de cumplimiento con la ley de transparencia. Debido a esta ley, las agencias de gobierno cada vez incluyen información presupuestaria, funciones, información organizacional, lista de funcionarios de gobierno y notificaciones oficiales en el Internet, a más de responder a pedidos escritos. Sin embargo, el gobierno no siempre respondió los pedidos de información e hizo excepciones, mencionando que la información requerida no estaba disponible. Los jueces no hicieron cumplir la ley que requiere que el gobierno entregue la información.

La ley es clara en cuanto a las excepciones para no revelar información, incluyendo información privada sobre cuentas personales de un individuo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), los representantes de una entidad pública deben responder a los pedidos dentro de los 10 días siguientes, un período que puede extenderse por cinco días adicionales. Los pedidos de información al gobierno son gratuitos. Los funcionarios públicos que se nieguen a responder a los pedidos sin una justificación legal pueden ser sancionados con penas equivalentes a un salario mensual, la suspensión de su cargo por un período de 30 días calendarios sin paga o remuneración; y, la destitución del cargo en el caso de rehusarse repetidamente a entregar la información requerida. La ley establece un mecanismo de apelación, tanto administrativo como judicial, para revisar la negativa de divulgación. Algunas entidades gubernamentales realizaron actividades de extensión pública y varias ONG trabajaron con los gobiernos locales para fomentar la efectiva implementación de estas políticas.

Sección 5. Actitud del Gobierno en relación con la investigación internacional y no gubernamental por supuestas violaciones de derechos humanos

Un número de grupos domésticos e internacionales de derechos humanos generalmente operaron sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales regularmente cooperaron con los grupos pero a menudo no implementaron sus recomendaciones.

En el 2011, el gobierno inició un proceso para estandarizar los requisitos para que ONG internacionales se registren y funcionen en el país. Las ONG reportaron que el proceso de registro fue difícil, que incluyó un engorroso requisito de obtener una carta de "no objeción" de un ministro del gabinete relevante al campo de trabajo de la ONG, y que sufrieron demoras en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI). En el 2012, la SETECI emitió nuevos estándares de cumplimiento para las ONG, que incluyeron la prohibición de interferencia política y otorgaron al gobierno mayor control sobre sus finanzas. Las ONG internacionales también están sujetas a las regulaciones del Decreto Presidencial 16 (véase sección 2, Libertad de Asociación).

El gobierno utilizó declaraciones públicas para criticar y atacar la credibilidad de ONG específicas locales e internacionales, así como sus conclusiones. El 24 de agosto, el presidente Correa se refirió a la Asociación Interamericana de Prensa como a un colaborador

con servicios extranjeros de inteligencia que trabaja para derrocar a los gobiernos latinoamericanos. Durante el año, el gobierno lideró esfuerzos por menospreciar y debilitar a la CIDH y específicamente a su relator especial para la libertad de expresión, describiéndola como herramienta del imperialismo y de las corporaciones. En respuesta al informe de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión el presidente Correa se refirió al mismo como "una monstruosidad" y "una vergüenza" en su mensaje semanal a la nación el 20 de abril. La ONG Fundamedios informó que el 19 de marzo el gobierno utilizó una cadena televisiva obligatoria para interrumpir la programación regular del canal privado de Ecuavisa para desacreditar el testimonio de la sociedad civil ante la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Fundamedios informó que los medios controlados por el gobierno también desataron una campaña para desacreditar el testimonio y que la organización recibió amenazas telefónicas, por correo electrónico y medios sociales. El presidente Correa manifestó que algunas ONG socavan la seguridad nacional y durante el año caracterizó a varias ONG locales con vínculos internacionales como informantes de embajadas extranjeras que buscan debilitar al gobierno.

Entidades gubernamentales de derechos humanos: La Oficina del Defensoría del Pueblo, que la Constitución describe como un cuerpo administrativo y financieramente independiente, bajo la función de Transparencia y Control Social (CPCCS) del gobierno, se centró en problemas de derechos humanos. Hasta el 2012, la última fecha en que hubo información disponible, la CPCCS tenía 144 abogados y presentaba casos regularmente ante la fiscalía. El público generalmente percibió la Oficina de la Defensoría del Pueblo como independiente, a pesar de que varios observadores cuestionaron su independencia de la rama ejecutiva luego de que el Defensor solicitara una acción legal contra el periódico *Hoy* por un artículo del 31 de mayo sobre la opinión del presidente Correa acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. La efectividad de la oficina mejoró e hizo esfuerzos por abordar la falta de recursos. El presupuesto asignado para la contratación y pago del personal permaneció casi intacto en comparación con el año anterior. En el 2012 la Oficina del Defensoría del Pueblo asumió nuevas responsabilidades, incluyendo el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad y se reorganizó para apoyar la descentralización de sus servicios en todo el país.

Una unidad especial dentro de la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar delitos revelados en el informe de la Comisión de la Verdad del 2010 sobre presuntos abusos a los derechos humanos ocurridos entre 1984 y el 2008, y el gobierno inició procesos judiciales en varios casos, incluso una acusación de alto nivel a 10 oficiales retirados por crímenes de lesa humanidad.

Sección 6. Discriminación, abusos de la sociedad y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma o situación social. El gobierno no hizo cumplir a cabalidad esas prohibiciones. La mujer, las personas con discapacidad, los indígenas, afroecuatorianos y personas GLBT continuaron enfrentando discriminación.

Las mujeres

Violación y violencia doméstica: A pesar de que la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso dentro del matrimonio, los abusos fueron generalizados. La ley criminaliza la violación y establece castigos de hasta 12 años de prisión. En concordancia con la ley contra la violencia a la mujer y la familia, la violación conyugal es considerada un tipo de violencia y puede ser procesado en virtud a lo dispuesto por el Código Penal. La pena por violación

que cause la muerte es de 12 a 16 años de prisión. El 26 de junio, la Comisión de Seguridad Integral del Ministerio del Interior informó que los delitos sexuales disminuyeron en un 23 por ciento desde el 2012. La Policía Nacional recibió 2.067 reportes de violación y detuvo a 789 individuos en el 2012, la última fecha en la cual el ministerio proporcionó información. No proporcionó estadísticas sobre enjuiciados, condenados o castigados.

En muchos casos no se reportó la violación y las agresiones sexuales debido al temor de las víctimas a retaliación por parte del infractor o a sufrir violencia adicional y estigmatización social. De acuerdo con informes locales de prensa, reportar violaciones y otras formas de violencia continúa siendo un proceso traumático, particularmente para las menores de edad. Por ejemplo, una víctima de violación debe presentar una demanda en la Fiscalía y someterse a varias evaluaciones ginecológicas, incluyendo la prueba Helsinki. En ciertos casos los oficiales maltrataron a las víctimas y las obligaron a enfrentar trabas burocráticas innecesarias. Adicionalmente, las autoridades a veces acusaron a las víctimas de ser responsables por la agresión.

La violencia más generalizada contra la mujer fue la violencia doméstica y sexual. De acuerdo con una encuesta nacional del 2011 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a 18.880 mujeres, el 61 por ciento informó haber sido víctima de abuso. El porcentaje fue mayor en las mujeres con hijos. El INEC también informó que la agresión psicológica fue la forma más común de abuso en todo el país, el menos reportado y el que acarrea menos sanciones que la agresión física. De acuerdo con una encuesta del INEC, la violencia de género afectó más a las mujeres indígenas que a cualquier otro grupo –el 68 por ciento de las mujeres que se identificaron como indígenas reportaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia doméstica.

La Fiscalía registró 767 lesiones debido a violencia familiar desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. En el 2012, comisiones gubernamentales para asuntos de mujeres y familia reportaron 74.025 quejas de violencia doméstica, 86 por ciento de las cuales fueron contra mujeres. Desde el 1 de agosto, unidades judiciales especializadas bajo el Ministerio de Justicia reemplazaron a las comisiones. El gobierno nombró 80 jueces especializados en familia y violencia de género en 19 provincias. Las unidades judiciales tienen responsabilidad por recoger las quejas y ayudar a las víctimas y tienen la autoridad de emitir órdenes de arresto de hasta 30 días contra el agresor. Las unidades envían los casos más graves a la Fiscalía para que sean procesados.

De acuerdo con el derecho de familia, se puede castigar la violencia doméstica con multas por “daños, dolor y sufrimiento” que van desde \$264 a \$3.960, dependiendo de la gravedad del delito. La ley además otorga a las cortes familiares el poder para retirar al cónyuge agresor de la casa si la cohabitación presenta riesgo para la víctima.

Acoso sexual: La ley criminaliza el acoso sexual y establece castigos de hasta dos años de prisión. A pesar de la prohibición legal, organizaciones de derechos de la mujer describieron el acoso en el sitio de trabajo como algo común. En el 2012, la Policía Nacional recibió 505 reportes y quejas de acoso sexual; no hubo estadísticas disponibles en el 2013. Varios estudios revelaron que las menores fueron blanco y las víctimas de este delito, más que cualquier otro grupo, particularmente en las escuelas y en los lugares públicos. El 23 de marzo, la organización Plan Internacional, junto con varios ministerios y organizaciones relacionadas con los derechos de los niños, reportaron que el 69 por ciento de mujeres menores de edad sufrieron acoso y violencia de género, incluso acoso sexual.

Derechos reproductivos: La ley reconoce el derecho básico de las parejas y de las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos, la separación entre ellos y el momento para tenerlos. La ley protege los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y exige cuidado prenatal, servicios de planificación familiar y pruebas de cáncer.

“Family Care International” informó que el 69 por ciento de mujeres dieron a luz con la ayuda de un asistente calificado. El Ministerio de Salud Pública manifestó que aproximadamente el 62 por ciento de nacimientos de madres auto identificadas como indígenas se llevaron a cabo en el hogar sin ayuda de asistentes profesionales en el 2010, última fecha en la que hubo información disponible. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de mortalidad materna en el país fue de 110 muertes por 100.000 nacidos vivos en el 2010. Un acceso limitado al cuidado de salud materna para las mujeres, particularmente aquellas que viven en áreas rurales y remotas, contribuyó a la alta tasa de mortalidad materna. Durante el año, el gobierno dio pasos para incrementar el número de personal médico en áreas rurales.

De acuerdo con estadísticas publicadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) en el 2012, el 73 por ciento de mujeres entre los 15 y 49 años utilizó anticonceptivos. “Family Care International” calculó que el 66 por ciento de las mujeres utilizó algún método de contracepción. El Ministerio de Salud diseñó programas de radio en lenguas indígenas para proporcionar a las comunidades indígenas rurales información sobre derechos reproductivos y el uso de métodos modernos de anticoncepción. El 19 de abril, la ministra de salud, Carina Vance, anunció nuevas regulaciones sobre la disponibilidad y acceso a métodos de control de la natalidad, que incluyeron contracepción de emergencia. El Ministerio de Salud Pública fomentó la educación sexual en todas las escuelas pública y se requirió que los menores de 18 años asistan a centros especializados de salud para un chequeo médico general antes de obtener anticonceptivos de emergencia.

Discriminación: La Constitución otorga a la mujer un sinnúmero de derechos económicos, políticos y sociales. La ley establece que el gobierno formule e implemente políticas para lograr la igualdad de género, incorporar un enfoque de género en sus planes y programas y proporcionar asistencia técnica para implementar la ley en el sector público. Sin embargo, la mujer a menudo no tuvo igualdad de derechos. La discriminación de la sociedad contra la mujer fue generalizada, particularmente con relación a las oportunidades educativas y económicas para mujeres mayores y para aquellas en los niveles económicos más bajos. El 8 de marzo, varias ONG reportaron que el ingreso promedio de la mujer era 33 por ciento más bajo que el de los hombres y solamente un 13.7 por ciento de mujeres tenían educación superior. El ingreso promedio mensual de la mujer fue \$258, comparado con \$386 del hombre, de acuerdo con un estudio del INEC. El mismo estudio reveló que un 8 por ciento de las mujeres trabajadoras eran jefes de familia y que el 40 por ciento eran auto empleadas, especialmente en el sector comercial. Fue más probable que la mujer estuviera empleada en el sector informal o como empleada doméstica, y por lo tanto disfrutó de menos estabilidad y percibió salarios menores. Las mujeres indígenas continuaron enfrentando una triple discriminación basada en género, etnicidad y situación económica reducida.

El gobierno combatió la discriminación contra la mujer y otros grupos vulnerables a través de varios programas. El 11 de abril, el Ministerio del Interior reportó el inicio de la segunda fase de la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” con el objetivo de eliminar las prácticas que condonan la violencia de género.

Niños

Registro de nacimientos: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país, nacimiento de una madre o padre ecuatoriano en el extranjero y por naturalización. Las estadísticas de UNICEF indican que el gobierno registró al 90 por ciento de nacimientos entre el 2005 y el 2011. Las oficinas provinciales del Registro Civil trabajaron conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) y con UNICEF en el registro de niños en todo el país. Por tres años consecutivos, el ministerio ha promovido la campaña "Inscribe tu nombre". La población afro ecuatoriana mostró tasas de registro significativamente menores que el público en general.

Mientras la ley prohíbe que las escuelas soliciten documentos del registro civil para la matrícula de los niños, algunas escuelas, la mayoría públicas, continuaron solicitándolos. Organizaciones de derechos humanos reportaron que este problema afectó particularmente a los niños refugiados. Otros servicios gubernamentales, incluso para pagos de prestaciones sociales y de cuidado primario de salud, requieren alguna forma de identificación.

Educación: De acuerdo con la Constitución, la educación es obligatoria hasta el noveno grado y libre hasta el décimo segundo grado. No obstante, los costos asociados con la educación, como uniformes y libros, y la falta de espacio en las escuelas públicas impidieron que muchos adolescentes asistieran a la escuela. En algunas provincias, las escuelas públicas negaron cupos a estudiantes por falta de espacio o asignaron a los niños a escuelas fuera de sus vecindarios locales.

Abuso de menores: El 11 de abril, el Observatorio para los Derechos de los Niños y Adolescentes, informó que el 44 por ciento de niños del país fueron víctimas de algún tipo de abuso. El 23 de abril, la Fiscalía reportó a los medios locales que tres de cada 10 niños sufrieron algún tipo de abuso sexual durante su vida y, para marzo, 476 casos se habían reportado en todo el país. Varias ONG reportaron que los niños que vivían en las calles o en áreas rurales del país, muchos de familias pobres indígenas, sufrieron condiciones de explotación.

Varios estudios revelaron que el 66 por ciento de niños entre los 8 y los 10 años reportaron ser víctimas de acoso escolar. Varias ONG iniciaron una serie de campañas para crear conciencia sobre los efectos de acoso escolar.

Matrimonio forzado y entre menores: La edad legal para contraer matrimonio es 18 años, a pesar de que la ley civil permite que los menores de 16 años contraigan matrimonio con autorización y consentimiento de ambos padres o si están legalmente emancipados. Las estadísticas de la UNICEF del 2011 mostraron que el 4 por ciento de adolescentes se casó a la edad de 15 años y que el 24 por ciento se casó a los 18. El mismo estudio indicó que el 16 por ciento de adolescentes mujeres, entre los 15 y los 19 años estuvieron casadas o en unión conyugal entre el 2002 y el 2011. Un informe de Naciones Unidas del 2004 calculó que el 7 por ciento de hombres entre los 15 y los 19 años estaban casados, divorciados o viudos.

Explotación sexual de niños: La ley prohíbe la pornografía infantil, con penas de 6 a 16 años de prisión. La edad de consentimiento es 14 años. El castigo por la explotación sexual comercial de niños es de 16 a 25 años de prisión. La explotación sexual comercial de menores continuó siendo un problema.

Secuestro internacional de niños: El país es signatario de la Convención de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños. Para información véase el [informe del Departamento de Estado](#) con información específica de cada país.

Antisemitismo

No hubo informes de actos de antisemitismo. Hubo una pequeña comunidad judía que incluyó alrededor de 250 familias en Quito y 200 familias en Guayaquil, de acuerdo con una sinagoga local.

Trata de personas

Véase el [Informe sobre Trata de Personas](#) del Departamento de Estado.

Personas con discapacidad

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y mental para efectos de empleo, educación, viaje aéreo y otro tipo de transporte, acceso al cuidado médico, o para la provisión de otros servicios estatales. El Consejo Nacional para la Igualdad de las Personas con Discapacidad supervisa las políticas de gobierno para las personas con discapacidad. A pesar de que la ley ordena acceso a los edificios y fomenta un acceso igualitario a la salud, la educación, la seguridad social, el empleo, el transporte y las comunicaciones, el gobierno no la hizo cumplir a cabalidad. La ley requiere que el 4 por ciento de empleados en empresas públicas y privadas con más de 25 empleados sean personas con discapacidad.

Una ley del 2012 otorga a las personas con discapacidad el derecho a pagar costos y tarifas reducidas en varias entidades públicas y privadas, incluso en servicios públicos, transporte e impuestos. La ley establece el derecho a tener instalaciones médicas y cobertura de seguro, incrementar el acceso y la inclusión en la educación y crea un nuevo programa de becas y préstamos estudiantiles para personas con discapacidad. La ley establece seguridad especial en el trabajo para aquellos con discapacidad o para quienes cuidan a una persona con discapacidad, y faculta a los empleados que adquieren una discapacidad a rehabilitarse y reubicarse. La ley además crea un nuevo sistema nacional cuya intención es la de evaluar y registrar a las personas con discapacidad. Muchos de los beneficios de la ley son transferibles a un padre o a la persona que ofrece el cuidado principal. La ley además da la responsabilidad a la Oficina del Defensoría del Pueblo para hacer el seguimiento de presuntas violaciones a los derechos de los discapacitados y establece una serie de multas y castigos por incumplimiento de la ley. Los observadores señalaron que el gobierno no implementó los procedimientos y regulaciones de una manera oportuna y expresaron su preocupación de que esta falta pudiera llevar a impedir la implementación plena de la ley.

El gobierno continuó con su campaña "Ecuador sin Barreras", liderada por el ex vicepresidente Lenín Moreno, que crea empleos para personas con discapacidad, proporciona financiamiento a las municipalidades para mejorar el acceso a edificios públicos y abre centros de capacitación y rehabilitación. La iniciativa además controló el grado de cumplimiento de las compañías que contratan personas con discapacidad. Los cuidadores o personas con discapacidad severa recibieron un subsidio gubernamental mensual de \$240. El gobierno reportó en su Revisión Periódica Universal (RPU) que había creado 10.000 nuevos empleos para personas con discapacidad y sus familias entre el 2008 y el 2011.

La ley ordena a las autoridades electorales facilitar el voto y el acceso a los recintos para las personas con discapacidad y los observadores internacionales felicitaron al gobierno por las facilidades brindadas para las personas con discapacidad en las elecciones nacionales del 2013. Durante el año, el CNE facilitó el acceso de discapacitados al proceso electoral a través de actividades de información y talleres para capacitar a observadores electorales

discapacitados. Adicionalmente, el CNE llegó a acuerdos con empresas de transporte para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las elecciones del 2013 y lanzó un pequeño programa piloto "Vote en Casa" para permitir el voto a domicilio para aquellos con discapacidad severa.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los afro-ecuatorianos, que son aproximadamente un 7 por ciento de la población de acuerdo con el censo de 2010, sufrieron discriminación generalizada particularmente en relación con la educación y las oportunidades económicas. La Constitución declara que el estado es plurinacional y afirma los principios de no discriminación, reconociendo los derechos de las comunidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias (una población rural de agricultores, reconocida como grupo étnico independiente). También ordena políticas de discriminación positiva que permita la representación de minorías. Desde el 2009, el gobierno empezó a implementar un plan nacional para erradicar la discriminación racial y la exclusión basada en las diferencias étnicas y culturales. De acuerdo con el informe Revisión Periódica Universal (UPR) del gobierno, la matriculación neta de los afro-ecuatorianos se incrementó en 2011 de 88.3 a 93.5 por ciento en educación primaria y de 44.2 a 58.5 por ciento en educación media. La proporción de afro-ecuatorianos matriculados en educación universitaria se incrementó de 9.5 a 17.8 por ciento. Según las estadísticas de 2010 proporcionadas por la organización Fundación Afro-América XXI, la comunidad afroecuatoriana mostraba tasas de analfabetismo sobre el 12 por ciento y una tasa de desempleo del 11 por ciento, comparadas con el 9 y el 6 por ciento respectivamente a escala nacional.

Las organizaciones afro-ecuatorianas señalaron que, a pesar de la ausencia de discriminación oficial, la discriminación de la sociedad y los estereotipos en los medios de comunicación continuaron afectándolos y resultaron en barreras para el empleo, la educación y la vivienda. Por ejemplo, los afro-ecuatorianos continuaron aseverando que la policía los detuvo para verificación de documentos más frecuentemente que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo no entrevistaron a personas cuyas solicitudes de empleo llevaban fotografías de afro-ecuatorianos. El escritor y editorialista afro-ecuatoriano Juan Montaña Escobar notó en julio que a pesar de los progresos legales, todavía existen brechas entre la ley y la práctica, específicamente la falta de temas afro-ecuatorianos en la educación.

El 4 de julio un juez ordenó el arresto de un oficial de capacitación del ejército por presuntos crímenes de odio y discriminación racial cometidos en el 2011 contra un cadete afro-ecuatoriano –el primer caso de este tipo en el país. De acuerdo con la demanda, entre las agresiones, el oficial forzó al cadete a luchar contra cinco hombres a la vez en el entrenamiento y lo hizo blanco de fuertes y repetidos castigos debido a su raza.

Pueblos indígenas

La gran mayoría de ciudadanos indígenas residen en áreas rurales, incluyendo las provincias de la sierra y la Amazonía. Las personas indígenas continuaron sufriendo discriminación en muchos niveles de la sociedad y, con pocas excepciones, estuvieron en el nivel inferior de la escala socioeconómica.

La ley reconoce los derechos de las comunidades indígenas para mantener propiedad comunal y el gobierno entregó en muchos casos títulos a las comunidades indígenas a pesar de que el proceso continuaba incompleto. En otras instancias, los grupos indígenas

administraron una reserva que el gobierno separó para protección de la biodiversidad. El gobierno trabajó con las comunidades indígenas para ayudarlas a obtener títulos de sus tierras.

La Constitución otorga a las personas y comunidades indígenas el derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre la explotación de recursos no renovables localizados en sus tierras y que pudieran afectar a su cultura y al medio ambiente. Los grupos indígenas aseguraron que las leyes que tienen que ver con la minería y los recursos hídricos e hidrocarburíferos no toman en cuenta suficientemente los puntos de vista indígenas y que aún más se inmiscuyen en la autonomía indígena sobre sus tierras y recursos. De acuerdo con Amnistía Internacional un decreto presidencial del 2012 que establece un marco consultivo no guarda concordancia con los estándares internacionales, ya que el gobierno no consultó con las comunidades indígenas para su formulación. A pesar de que la Corte Constitucional solicitó que el gobierno consulte con las comunidades afectadas en temas del agua antes de promulgar nuevas leyes, no hubo un mecanismo claro de consulta y no todas las comunidades participaron.

La Constitución permite que las personas indígenas tengan participación en los beneficios que puedan producir los proyectos de extracción de recursos naturales y reciban compensación por cualquier daño resultante. En el caso de daños ambientales, la ley ordena acciones correctivas inmediatas del gobierno y una restitución total por parte de la compañía responsable, sin embargo, algunas organizaciones indígenas aseveraron que faltaron consultas y acciones de remediación.

Grupos indígenas presionaron al gobierno y organizaron protestas en un intento por obtener una mayor participación en las decisiones sobre recursos naturales y desarrollo. Algunos líderes indígenas enfrentaron acusaciones penales por participar en las protestas sociales (véase sección 2.b)

A pesar de que las personas indígenas tienen los mismos derechos civiles y políticos que los demás ciudadanos, algunos de sus líderes reportaron discriminación en el acceso a la educación superior y al empleo. La Constitución refuerza los derechos de las personas indígenas, declara que el estado es plurinacional, reconoce el quichua y el shuar como "idiomas oficiales de relaciones interculturales" y específicamente reconoce la justicia indígena. La falta de una relación claramente definida entre la justicia indígena y el sistema regular de justicia, sin embargo, llevó a conflictos legales entre el gobierno y los líderes indígenas. Los castigos indígenas recibieron mayor atención luego del mortífero conflicto en marzo entre tribus de la Amazonía. El 29 de mayo, el jefe del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, pidió que la Corte Constitucional defina el alcance de la justicia indígena en el país y expresó preocupación por lo que consideró un uso incorrecto de las regulaciones relacionadas a la justicia por mano propia y su jurisdicción, que deja algunos delitos impunes. Hasta el fin de año no se había emitido una resolución.

Los daños ambientales, en parte debidos a la deforestación y a la producción petrolera, constituyeron un serio problema. Los colonizadores, incluso aquellos de otros grupos indígenas, narcotraficantes y leñadores, ocuparon ilegalmente el territorio indígena. Funcionarios locales corruptos, la falta de voluntad política y la división entre comunidades indígenas y dentro de ellas socavaron los esfuerzos indígenas por detener el flujo de madera ilegalmente obtenida. La minería a pequeña escala, a menudo por parte de las mismas comunidades indígenas, también contribuyó al daño ambiental.

Abuso, discriminación y actos de violencia de la sociedad basados en la orientación sexual y en la identidad de género

La Constitución incluye el principio de la no discriminación y el derecho a decidir la orientación sexual de cada uno. La ley además prohíbe los delitos de odio. A pesar de que la ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, las personas GLBT continuaron sufriendo discriminación en instancias tanto públicas como privadas, particularmente en las áreas de educación, empleo y acceso al cuidado médico. Las organizaciones GLBT informaron que las personas transgénero sufrieron más discriminación debido a que fueron más visibles. Las personas transgénero no pudieron cambiar su género en las cédulas de identidad que emite el gobierno. Cuando un candidato presidencial hizo comentarios vilipendiosos contra las personas GLBT durante la campaña del 2013, tanto la Defensoría del Pueblo como el Consejo Nacional Electoral respondieron a las quejas. El candidato perdió su derecho político por un año y pagó una multa de \$3.180. Generalmente, el gobierno, liderado por el Defensor del Pueblo, respondió a las preocupaciones expresadas por la comunidad GLBT. El INEC realizó una encuesta a 2.805 personas GLBT (la primera a escala nacional en el país), que mostró que el 71 por ciento de los encuestados había experimentado alguna forma de discriminación (incluyendo rechazo y violencia) dentro de su misma familia. La encuesta también mostró que el 44 por ciento había enfrentado discriminación en el sitio de trabajo, 40 por ciento en la educación y 34 por ciento en el cuidado médico. Más aún, el 66 por ciento informó haber experimentado algún tipo de violencia en su trato con el público en general. Los grupos GLBT aseguraron que la policía y los fiscales no investigaron a cabalidad las muertes de personas GLBT, incluso cuando hubo sospecha de que los homicidios fueron a causa de su orientación sexual o su identidad de género.

Las organizaciones GLBT y el gobierno continuaron informando que centros privados de tratamiento internaron a personas GLBT contra su voluntad para "curarlas" o "deshomosexualizarlas" a pesar de que tal tratamiento es ilegal. Se ha reportado que las clínicas utilizaron tratamientos crueles, incluso violación, en un intento por cambiar la orientación sexual de las personas GLBT. En mayo, Zulema Constante, fue secuestrada por una clínica a pedido de sus padres y mantenida contra su voluntad por más de dos semanas. El gobierno llevó a cabo una revisión de las clínicas de rehabilitación en todo el país, cuyo número según informes de prensa se calcula en más de 300. Estas clínicas a menudo fueron difíciles de identificar, ya que son clandestinas y no tienen registro. En una entrevista radial en julio, la ministra de salud Carina Vance aseveró que el gobierno había cerrado 18 clínicas (incluso 15 por violaciones a los derechos humanos) desde el 2012.

Miembros de la comunidad GLBT continuaron informando que el gobierno frecuentemente negó su derecho a un acceso igualitario a la educación formal. A estudiantes GLBT, particularmente a aquellos en la comunidad transgénero, a veces se les desanimó de asistir a clases (particularmente en la educación superior) o se les negó diplomas al final de sus estudios. Varias ONG reportaron que los notarios ocasionalmente negaron a parejas del mismo sexo el derecho a la "unión de hecho", un mecanismo legal garantizado por la Constitución similar a la unión civil. Una encuesta realizada por la ONG Silueta X mostró que en la provincia del Guayas, el 50 por ciento de notarios rehusó registrar una unión de hecho de parejas del mismo sexo. La población GLBT involucrada en el comercio sexual informó de situaciones abusivas, extorsión y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad.

Otro tipo de violencia o discriminación de la sociedad

La Constitución específicamente prohíbe la discriminación contra las personas con VIH/SIDA. No hubo violencia de la sociedad contra personas con VIH/SIDA. Sin embargo, las ONG informaron que individuos con VIH/SIDA consideraban que habían experimentado discriminación, inclusive en temas como oportunidades igualitarias de empleo y acceso a cuidado médico apropiado. Un estudio del 2012 realizado por la ONG Kimirina mostró que el 32 por ciento de personas con VIH encuestadas había perdido su empleo o la fuente de ingresos en los 24 meses previos –48 por ciento de ellos directamente por tener VIH. El mismo estudio indicó que los empleadores negaron el 9 por ciento de solicitudes debido a infección con el VIH durante los 12 meses previos.

La justicia por mano propia continuó siendo un problema. Ese tipo de violencia ocurrió particularmente en las comunidades indígenas y en los vecindarios pobres de las grandes ciudades donde hay poca presencia policial. El 29 de mayo, buscando venganza por el homicidio de miembros de su tribu, un grupo de guerreros Waoranis (o Huaorani) atacaron a la tribu no contactada Taromenane, quemando sus chozas y según se informó matando a varios Taromenane (incluso a niños y ancianos) y secuestrando a dos chicas jóvenes.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y negociación colectiva

La ley, con algunas excepciones, establece el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a unirse a los sindicatos de su elección, a realizar huelgas legales y a negociar colectivamente. La ley prohíbe que los empleadores utilicen criterios discriminatorios al contratar, que discriminen contra los sindicatos y que tomen retaliaciones contra los trabajadores en huelga y sus líderes. La ley prohíbe el despido de miembros del sindicato desde el momento en que notifica al inspector de trabajo sobre su asamblea general hasta la formación de su primera junta ejecutiva, el primer paso legal para la formación de un sindicato. No se requiere que los empleadores reincorporen a los trabajadores despedidos por actividad sindical pero se requiere que le paguen compensación y multas.

Se requiere que todos los empleados privados de un sindicato negocien colectivamente cuando el sindicato así lo requiera. La ley requiere un mínimo de 30 trabajadores para la creación de una asociación, comité de trabajo, o sindicato laboral y la ley no permite que ciudadanos extranjeros trabajen como funcionarios en un sindicato. La ley prohíbe a los empleadores utilizar la tercerización doméstica, la subcontratación y el contrato a destajo como medio de evitar otorgar a los empleados el derecho de formar un sindicato y el derecho a obtener beneficios como empleados.

La ley protege el derecho de los empleados del sector privado a la huelga en su propia representación y a realizar huelgas solidarias de tres días o boicots a nombre de otras industrias. La ley establece, sin embargo que todas las disputas laborales colectivas sean referidas a las cortes de conciliación y arbitraje. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno para que enmiende esta estipulación limitando tal arbitraje forzoso a casos en los cuales ambas partes acuerden el arbitraje y la huelga involucre servidores públicos que tienen autoridad en nombre del estado o que presten servicios esenciales.

Durante una huelga legal, en algunas industrias los trabajadores pueden tomar posesión de una fábrica o lugar de trabajo (por consiguiente interrumpiendo la producción en el lugar) y pueden recibir protección policial durante la toma. En la mayoría de industrias, la ley exige un período de 10 días de “enfriamiento” desde el momento en que se declara una huelga hasta el momento de iniciarla. En el caso de las industrias agrícolas y de hospedaje, en

donde los trabajadores son necesarios para el "cuidado permanente", la ley requiere de un período de "enfriamiento" de 20 días desde el día en que se convoca a la huelga y los trabajadores no pueden tomar posesión del lugar de trabajo. Durante este tiempo los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo sobre el número de empleados que son necesarios para asegurar un nivel mínimo de servicios y al menos el 20 por ciento de la fuerza laboral debe continuar trabajando para proporcionar los servicios esenciales. La ley establece que "el empleador puede contratar personal sustituto" solamente cuando los trabajadores en huelga rehúsen enviar el número de trabajadores requerido para proporcionar el mínimo servicio necesario.

La ley restringe el derecho a la negociación colectiva y a la huelga para los trabajadores de "sectores estratégicos" del sector público. Tales sectores incluyen los trabajadores de salud, sanidad ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción de hidrocarburos, procesamiento de combustibles, transporte y distribución, transporte público y correos y telecomunicaciones. Algunos de los sectores definidos como estratégicos exceden el estándar de la OIT para servicios esenciales. Está prohibido que los trabajadores de estos sectores formen sindicatos, realicen huelgas o negocien colectivamente. Los trabajadores de estos sectores que intenten hacer huelga pueden enfrentar cargos con penas que van desde dos a cinco años de prisión. Solamente un sindicato, supuestamente afiliado al partido de gobierno, está disponible para los trabajadores del sector público. A pesar de que la vasta mayoría de los trabajadores del sector público mantuvieron membresía en asociaciones del sector laboral, tales asociaciones no tienen permitido hacer huelga o negociar colectivamente.

Los esfuerzos gubernamentales por hacer cumplir las protecciones legales de libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva fueron a menudo inadecuados e inconsistentes. Las compañías que despiden empleados que intentan formar un sindicato o aquellos que despiden a miembros de un sindicato ejercitando sus derechos enfrentan una multa de un salario anual por cada individuo arbitrariamente despedido. El proceso para registrar un sindicato toma a menudo semanas o más y es complicado, inhibiendo el registro de sindicatos. Los individuos todavía empleados pueden llevar sus quejas contra sus empleadores a la Oficina de Inspección Laboral o a las cortes encargadas de la protección de los derechos laborales si ya no están empleados. Los sindicatos pueden también llevar sus quejas a una junta tripartita de arbitraje establecida para escuchar dichas quejas. Estos procesos a menudo enfrentaron largas demoras y apelaciones.

Los empleadores no siempre respetaron la libertad de asociación y negociación colectiva y tomaron represalias contra trabajadores por organizarlas. A pesar de ser independientes, los sindicatos a menudo tuvieron vínculos fuertes con movimientos políticos.

El 29 de agosto, un violento enfrentamiento entre trabajadores en huelga de un ingenio y oficiales policiales que no permitieron que los trabajadores cierren la planta resultó en lesiones a 14 oficiales policiales. La Policía arrestó a tres trabajadores en huelga con cargos de rebelión por su papel en el enfrentamiento. Los trabajadores se habían unido a la huelga desde el 14 de agosto, aduciendo que su empleador no había cumplido con ciertas obligaciones laborales que requieren que las compañías privadas repartan sus utilidades a los empleados. De acuerdo con los huelguistas, la compañía no lo había hecho desde el 2000 hasta el 2008. El Ministerio de Relaciones Laborales investigó la denuncia y estuvo de acuerdo en que la compañía estaba obligada a pagar a sus empleados una porción de sus utilidades. Las organizaciones laborales informaron de seis casos durante el año de trabajadores que fueron despedidos por actividades sindicales en plantaciones de banano. En varios otros casos las denuncias legales fueron presentadas y continuaban pendientes.

Las organizaciones laborales reportaron que, a pesar de ser ilegal, algunas compañías utilizaron la tercerización o el contrato laboral doméstico para evitar contratar a empleados con derecho a organizarse, formar sindicatos y negociar colectivamente.

b. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzado u obligatorio y prescribe castigos de seis a 16 años de prisión. Tales castigos son proporcionales con los prescritos por otros delitos graves.

El gobierno no siempre hizo cumplir efectivamente la ley. Entre enero y octubre 3, una unidad policial anti trata junto con la unidad especializada en delitos contra menores y adolescentes rescató a 40 niños de trabajos forzados. El gobierno mostró mejora significativa en su efectividad para rescatar las víctimas de trabajo forzado y enjuiciar ese tipo de delitos. Los recursos continuaron siendo insuficientes para abordar el trabajo forzado en su totalidad.

Dos unidades de cumplimiento de la ley lideraron los esfuerzos gubernamentales para combatir la trata de personas, que incluye el trabajo forzado –la Unidad Policial Anti Trata (UPAT), que se dedica a combatir todo tipo de casos de trata, y la DINAPEN, que es una unidad especializada en delitos contra menores, que incluye los casos de trata. La DINAPEN tomó el liderazgo, trabajó en coordinación con la UPAT, o estuvo involucrada en aproximadamente el 50% de los rescates de personas en trabajos forzados durante el año. Los Ministerios de Relaciones Laborales, de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores hacen cumplir las leyes contra el trabajo infantil. Desde el 2011, con el apoyo de las ONG, el gobierno ha incrementado el financiamiento y la capacitación de estas unidades. Sin embargo, los recursos continúan siendo insuficientes para abordar el trabajo forzado en su totalidad.

Informes de trabajo forzado de niños (véase sección 7.c.) y mujeres persistieron, los migrantes, los refugiados y las personas indígenas fueron particularmente vulnerables. Se reportó con más frecuencia que las mujeres fueron víctimas de trabajo forzado mientras trabajaban como empleadas domésticas. Hubo informes de que algunos trabajadores migrantes colombianos fueron víctimas de trabajo forzado y las condiciones de trabajo reportadas iban desde explotación laboral (véase también sección 7.d) hasta deudas forzosas por alimentación y alojamiento en las plantaciones de aceite de palma.

Véase también el [Informe sobre Trata de Personas](#) del Departamento de Estado.

c. Prohibición de trabajo infantil y edad mínima de empleo

La ley establece la edad mínima de trabajo en los 15 años para todo tipo de trabajo y la cantidad máxima de horas que un menor puede trabajar en seis horas por día, cinco días a la semana. Se requiere que quienes empleen a menores que no han terminado la escuela primaria les proporcionen dos horas adicionales libres para completar sus estudios. La ley requiere que los empleadores paguen a los menores los mismos salarios que reciben los adultos por el mismo tipo de trabajo. La ley prohíbe que menores de 18 años trabajen en condiciones “peligrosas o malsanas”. La ley enumera 93 actividades económicas que califican como peligrosas y malsanas que incluyen la esclavitud, prostitución, pornografía y narcotráfico. Adicionalmente, la ley incluye trabajo que “probablemente dañe la salud, la seguridad o la moral de un niño” como el trabajo en minas, en botaderos de basura, en camales, con ganado, la pesca, en empresas textiles, en tala de árboles, servicio doméstico

y en cualquier ambiente laboral que requiera exposición a substancias tóxicas o peligrosas, polvo, maquinaria peligrosa o ruido excesivo.

La ley establece sanciones por la violación de las leyes laborales de menores, que incluyen multas y el cierre de los negocios. Las multas por violación de las leyes laborales de menores van desde los \$50 a los \$300 para los padres o guardianes, y de \$200 a \$1.000 para quienes contraten menores de 15 años. La ley autoriza que inspectores del trabajo realicen inspecciones en los sitios de trabajo como fábricas, talleres, en el hogar del trabajador y en cualquier otro lugar en donde consideren apropiado o cuando un empleador o trabajador la solicite.

Los Ministerios de Relaciones Laborales y de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores hacen cumplir las leyes laborales de los menores. Según el Ministerio del Trabajo, retiró a 671 menores de su trabajo como resultado de las inspecciones durante los primeros ocho meses del año.

El gobierno continuó el programa "Ecuador sin Trabajo Infantil para 2015", encaminado a eliminar toda forma de trabajo ilegal infantil. El programa estableció campañas de varios años específicamente enfocándose en el trabajo infantil en los basureros, en la industria florícola y entre los mendigos. El gobierno continuó inspeccionando botaderos y camales para asegurarse de que los menores no regresen a sus trabajos allí. Estos programas trabajaron con las familias durante el año para matricular a los niños en la escuela al tiempo que les proporcionaron ayuda financiera para suplementar el ingreso perdido por la asistencia de los niños a la escuela. El programa también fue exitoso al retirar muchos niños de la calle, en donde a menudo trabajaban como vendedores o mendigos. El 11 de junio el MIES anunció su meta de erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola, incluso incrementando las inspecciones laborales en los campos, trabajando con un grupo de trabajo público y privado establecido para explicar y hacer cumplir las leyes laborales y educando a las familias sobre los efectos negativos del trabajo infantil. Un segundo programa gubernamental, que se inició en el 2012, apoya estos esfuerzos y apunta a eliminar todo trabajo infantil ilegal (no solamente las peores formas) para el 2020.

De acuerdo con estadísticas publicadas durante el año por UNICEF y el INEC y reportadas por la OIT, el 8.6 por ciento de menores y adolescentes (359.597) entre los 5 y los 17 años trabajaba. A pesar de que esta cifra fue mayor que la cifra de niños y adolescentes supuestamente trabajando en el 2010 (269.881), la metodología utilizada en la encuesta del 2013 fue modificada para proporcionar un cuadro más exacto de la situación del trabajo infantil. La encuesta del INEC fue mejorada para obtener respuestas más verdaderas y relevantes clasificando el trabajo doméstico sobre 14 horas a la semana como "trabajo" en lugar de "ayuda en el hogar" y dirigiendo todas las preguntas a los niños y adolescentes en lugar de a los padres. De acuerdo con la encuesta del INEC, el 75 por ciento de los niños y adolescentes que trabajaba también asistía a la escuela, un 25 por ciento más que en el 2010. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el MIES en junio 12, el trabajo infantil cayó del 17 por ciento en el 2007 al 6 por ciento en el 2012.

Según varias organizaciones laborales y ONG, el trabajo infantil en el sector formal ha venido disminuyendo constantemente por muchos años. Según estos grupos, fue raro en virtualmente todos los sectores formales de la industria debido a un mayor número de inspecciones del gobierno, mejor aplicación de la regulaciones gubernamentales y por el auto cumplimiento del sector privado. Por ejemplo, en los últimos años, los productores de banana trabajaron con el Ministerio de Agricultura y los sindicatos para elaborar un plan para eliminar el trabajo infantil, formando comités que certifican cuando las plantaciones

utilizan mano de obra infantil. Estos procesos de certificación no se aplican al sector informal o a las bananeras administradas por una familia.

El trabajo infantil continuó siendo un problema en el sector informal responsable de aproximadamente el 52 por ciento de los trabajos en el país. En las áreas rurales fue más probable encontrarlos trabajando en granjas o negocios familiares e incluso en bananeras o cultivos de rosas. Por ejemplo, la OIT calculó que entre el 8 y el 10 por ciento de menores en la fuerza laboral trabaja en plantaciones de banano, a pesar de que las organizaciones laborales reportaron que los niños fueron en gran parte retirados de los trabajos más pesados y peligrosos. Adicionalmente, hubo reportes de niños en el área rural que trabajaban en operaciones familiares en pequeña escala de producción de ladrillos o extracción de oro. Algunas ONG consideraron que era probable que los niños fuesen reclutados por las milicias o las pandillas cercanas a la frontera norte para transportar drogas. En las áreas urbanas muchos niños menores de 15 años trabajaban informalmente para mantenerse a sí mismos o contribuir a los ingresos familiares con las ventas callejeras, limpiando zapatos o mendigando.

Véase además [Conclusiones sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil](#) del Departamento de Estado.

d. Condiciones aceptables de trabajo

El salario mínimo mensual fue \$318. El cálculo oficial del nivel de pobreza fue de \$77.03 al mes y el nivel extremo de pobreza oficial fue \$43.41 al mes. Aproximadamente un 23.7 por ciento de la población vivía en el nivel de pobreza o por debajo de él y un 8.5 por ciento por debajo del nivel extremo de pobreza.

La ley limita el período estándar de trabajo a 40 horas por semana, ocho horas al día, con dos días consecutivos de descanso por semana. Los mineros están limitados a seis horas por día y solo pueden trabajar una hora adicional al día con pago suplementario. El pago suplementario es un salario básico y medio por trabajo realizado de las 6h00 a las 24h00. El trabajo realizado desde las 24h00 hasta las 6h00 recibe el doble del salario básico, a pesar de que los trabajadores cuyo horario estándar es en la noche reciben un suplemento del 25%. El pago suplementario también se aplica al trabajo realizado en fines de semana y días festivos. El sobretiempo está limitado a no más de cuatro horas al día y a un total de 12 horas por semana. El sobretiempo obligatorio está prohibido. Los trabajadores tienen derecho a una vacación anual de 15 días consecutivos, incluyendo fines de semana, más un día extra por cada año luego de los cinco años de servicio. Se aplican diferentes regulaciones con relación al horario y a las vacaciones para trabajadores domésticos puertas adentro. La ley establece la salud y seguridad de los trabajadores y delinea los estándares de salud y seguridad. Los trabajadores extranjeros y migrantes están sujetos a los mismos estándares laborales.

El cumplimiento de las leyes laborales es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales y la Administración de Seguridad Social. El gobierno tenía aproximadamente 260 inspectores a cargo de hacer cumplir las leyes laborales incluyendo aquellas para trabajo infantil. El Ministerio del Trabajo realizó 14.500 inspecciones de violaciones laborales entre enero y julio, pero la inexperiencia de los inspectores recientemente contratados obstaculizó los esfuerzos de imposición de la ley.

Las inspecciones laborales pueden realizarse por cita o luego de una queja de un trabajador. Si un trabajador solicita una inspección y un inspector del Ministerio de Relaciones Laborales

confirma un peligro en el sitio de trabajo, puede clausurar el lugar. Las inspecciones laborales generalmente se realizaron en respuesta a quejas, no como una medida preventiva y los inspectores no pudieron realizar visitas no anunciadas. En algunos casos se rectificaron las violaciones, pero en otros fueron sujetas a impugnaciones legales que demoraron los cambios por meses. Las sanciones se limitaron a multas monetarias entre \$950 y \$6.360, no fueron suficientes para disuadir las violaciones y a menudo no se hicieron cumplir.

El Ministerio de Relaciones Laborales continuó sus reformas de aplicación de los derechos laborales incrementando las inspecciones laborales e incrementando el número de trabajadores protegidos por contrato, los estándares de salario mínimo y la afiliación para beneficios de seguro social. Varias ONG aseguraron que el gobierno rara vez investigó las quejas de los migrantes y refugiados. Los líderes laborales y los empresarios también denunciaron que la corrupción fue común entre los inspectores.

Un referéndum en el 2011 aprobó cárcel para los empleadores que no cumplan con el requisito de afiliar a los trabajadores domésticos al Seguro Social.

La mayoría de los empleados trabajaban en el gran sector informal y en las áreas rurales y no estaban sujetos a las leyes de salario mínimo ni a los beneficios obligados por ley. Los problemas de salud y seguridad ocupacional fueron más prevalentes en el gran sector informal. El código laboral distingue la salud y seguridad de los mineros, sin embargo las reglas de seguridad no se aplicaron en las pequeñas minas que constituyen la vasta mayoría de empresas en el sector minero. Los migrantes y refugiados fueron particularmente vulnerables a las condiciones peligrosas y a la explotación laboral.

Continuaron los informes de abuso o poca supervisión gubernamental en la industria del aceite de palma en donde muchos trabajadores eran refugiados colombianos y otros migrantes, así como fugitivos de la ley. Los abusos incluían horario excesivo de trabajo, salarios inexistentes o muy bajos y condiciones inhumanas de vida.